

El Protocolo de Kioto en España

Joaquín Nieto y José Santamarta

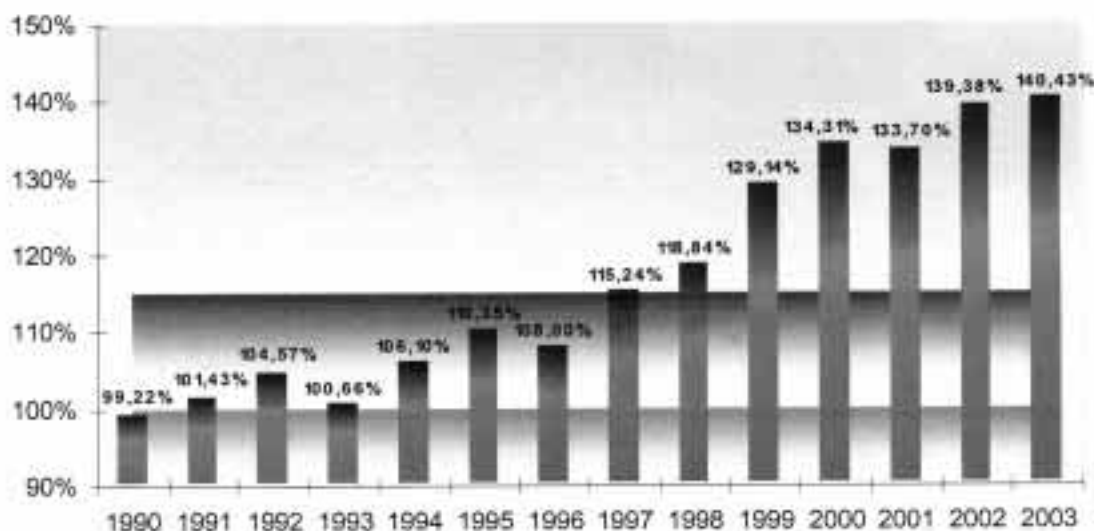


Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO₂) equivalente en España han aumentado un 40,43% en el año 2003 respecto a 1990. De 1996 a 2003 las emisiones aumentaron un 32,43%. Los gobiernos del PP dejan una grave herencia que hipoteca la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Emisiones y el propio

cumplimiento de las obligaciones españolas dentro de la Unión Europea.

Los gobiernos del PP no elaboraron ningún plan para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010.

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA (1990-2003)



Tampoco elaboraron el Plan Nacional de Asignación, incumpliendo los plazos, y dado el aumento de las emisiones, han dejado un margen de actuación muy pequeño al nuevo gobierno, que deberá realizar acciones complicadas y conflictivas, con el fin de recuperar los ocho años perdidos y poder cumplir los compromisos de España en el marco del Protocolo de Kioto y el reparto de la carga en el seno de la Unión Europea.

No hay una relación mecánica entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones, como demuestra la experiencia internacional. Mientras en España las emisiones han aumentado un 32,1% entre 1990 y 2001, en Alemania se han reducido un 18,3%, en Reino Unido un 12%, en Suecia un 3,3% y en el conjunto de la Unión Europea han disminuido un 2,3% entre 1990 y 2001.

Hoy ya superamos el límite que nos marca Kioto en 73 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalente, que se reducen a 48,5 si se incluyen los sumideros (bosques). La situación es difícil, pero menos dramática de lo que se piensa, dado el precio previsible de la tonelada de dióxido de carbono (CO₂) equivalente, que es probable que no sobrepase los 10 euros en el periodo 2008-2012.

Con el escenario previsto, en el periodo 2008-2012 deberíamos comprar cada año derechos de emisión por 112 millones de toneladas en unidades de CO₂ equivalente, que nos costarían 1.112 millones de euros (para un precio de 10 euros por tonelada de CO₂). Para evitarlo hacen falta políticas activas,

TABLA 1. Evolución de las emisiones de gases de invernadero, y consumos de energía primaria, final y electricidad en relación al PIB. Variación porcentual respecto al año anterior

Año	Emisiones GEI	Consumo energía primaria	Consumo energía final	Consumo electricidad	PIB
1996	-2,1	0,3	3,0	3,1	2,3
1997	+6,7	5,9	4,5	4,3	4,0
1998	+3,1	6,7	8,5	6,6	4,3
1999	+8,7	4,7	3,0	6,5	4,1
2000	+4,0	4,9	5,0	5,4	4,1
2001	-0,5	2,3	4,1	5,8	2,8
2002	+4,2	3,5	2,0	2,9	2,0
2003	+0,8	3,1	5,5	6,2	2,4
1996-2003	+30,0	35,7	36,6	47,1	28,8

Fuente: Elaboración propia.

ña había aumentado su intensidad energética hasta el 0,232 mientras que la UE la había reducido al 0,198, datos que demuestran la pérdida de eficiencia energética respecto a la UE. Las políticas europeas se orientan hacia *desacoplar* el crecimiento de la actividad económica del consumo de energía, tanto final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo las emisiones.

Ha habido una ausencia de políticas de ahorro y eficiencia energética, y las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de nuestra economía, situación que habrá que subsanar en el futuro.

A lo largo de los ocho años de gobiernos del PP, mientras que el PIB aumentó un 28,8%, el consumo de energía primaria creció un 35,7%, el consumo de

encaminadas a promover la movilidad sostenible, el aumento de la eficiencia y las energías renovables.

La economía española ha registrado los peores índices de intensidad energética y de emisiones de la Unión Europea. Si en 1996, España (0,222) partía de una situación similar en cuanto a la intensidad primaria respecto a la UE (0,215), en el año 2000, Espa-

ña había aumentado su intensidad energética hasta el 0,232 mientras que la UE la había reducido al 0,198, datos que demuestran la pérdida de eficiencia energética respecto a la UE. Las políticas europeas se orientan hacia *desacoplar* el crecimiento de la actividad económica del consumo de energía, tanto final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo las emisiones.

Ha habido una ausencia de políticas de ahorro y eficiencia energética, y las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de nuestra economía, situación que habrá que subsanar en el futuro.

A lo largo de los ocho años de gobiernos del PP, mientras que el PIB aumentó un 28,8%, el consumo de energía primaria creció un 35,7%, el consumo de energía final un 36,6% (el consumo final es ligeramente inferior por el mayor peso del gas y la eólica) y el de electricidad un 47,1%.

Los gobiernos de los países de la UE deberían haber elaborado un Plan Nacional de Asignación de Emisiones (PNA) antes del 31 de mar-

Situación de los PNA en la Unión Europea en junio de 2004 (15 países).

Han presentado PNA a la Comisión Europea	Borradores	No han presentado nada
Alemania	Italia	España
Austria	Portugal	Grecia
Finlandia	Bélgica	
Irlanda	Francia	
Holanda		
Luxemburgo		
Suecia		
Dinamarca		
Reino Unido		

TABLA 2. Emisiones e impacto económico por sectores afectados por la Directiva en España.

Sector	Año base 1990 (Mt CO ₂)	2001 (Mt CO ₂)	2010 Escenario tendencial (Mt CO ₂)	Aumento tendencial sin medidas de las emisiones 1990-2010	% sobre el total en 2001	% sobre el total en 2010	Derechos probables anuales a asignar en 2005-2007
Generación eléctrica	64,67	84,78	105,80	64%	22	21	75 a 90
Refino de petróleo	12,74	15,20	17,57	38%	4	4	15,5 a 16,5
Cemento y cal	22,40	27,50	32,53	45%	7	7	27 a 30
Vidrio y cerámica	8,60	12,40	16,73	95%	3	3	12 a 14
Papel y pasta de papel	2,51	3,81	5,36	114%	1	1	3,7 a 4,1
Siderurgia	14,11	11,35	9,50	-33%	3	2	11
Total sectores incluidos en la Directiva	125,02	155,04	187,48	50%	40	38	144,2 a 165,6

zo de 2004, en el que se determinarían la cantidad total de derechos de emisión que prevé asignar para el primer periodo entre los sectores afectados. Los planes citados deben remitirse a la Comisión Europea que, en un plazo máximo de tres meses, deberán aprobarlos o rechazarlos. España, junto con Grecia, aún no ha presentado ni elaborado ningún Plan Nacional de Asignación de Emisiones.

Las instalaciones industriales incluidas, entre 600 y 900 en España, representaron el 40,5% de las emisio-

nes en 2000. En España es probable que se asignen unos 160 millones de toneladas de CO₂, que se repartirían de la siguiente manera: entre el 57% y el 62% correspondería a las centrales termoelectricas, del 8% al 10% a las refinarias de petróleo, del 5% al 7% a la siderurgia, del 16% al 18% al cemento, del 1% al 1,5% a la cal, del 6% al 7% a vidrio y cerámica y del 1 al 1,5% al sector papelero. Es probable que la asignación sea gratuita, sin acudir a subastas, y que haya una reserva para nuevos entrantes (del 5 al 8% de los derechos).

